



NUE 17-ADP-2018 (OC)

contra la Dirección General de Centros Penales

Resolución Definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas del cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

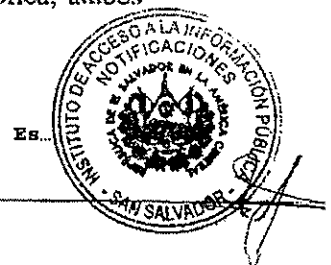
A. Descripción del Caso

I. El apelante [REDACTED], presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "d" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: suprimir del antecedente penal la palabra "cancelado" por "no tiene". El delito por el que fue rehabilitado: **"Abandono de servicio"**, solicitó la certificación para trámites ante el Registro de Armas.

En relación con ello, la oficial de información de la DGCP resolvió denegar dicha petición, con base al Art. 110 numeral 2) del Código Penal (CP), un efecto de la rehabilitación, "es la cancelación de antecedentes penales en el Registro de condenados que lleve el organismo correspondiente". Asimismo el Art. 112 inciso tercero de ese Código, establece "en los casos de cancelación o caducidad de los registros, el antecedente penal que consta no se tendrá en cuenta para ningún efecto, si se solicitan certificaciones de éstos, **se deben hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias**". (Las negritas son nuestras)

II. El apelante interpuso recurso de apelación ante este Instituto, el cual fue admitido, designándose a la Comisionada **María Herminia Funes de Segovia**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución y se requirió a la DGCP que rindiera el informe justificativo. Sin embargo, al presentar la renuncia a su cargo, el caso se reasignó a la Comisionada **Olga Noemy Chacón de Hernández**.

La DGCP rindió informe justificativo de conformidad con el Art. 88 de la LAIP y ofreció prueba documental, referente a la respuesta brindada por la Unidad de Registro y Control Penitenciario, y la resolución emitida por su Unidad de Acceso a la Información Pública, ambos



documentos se encuentran incorporados en el expediente administrativo de la solicitud de información.

III. El apelante, presentó junto con su escrito de apelación la documentación siguiente: a) copia simple de resolución UAIP/OIR/0005/2018, de fecha 19 de enero de 2018, emitida por la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP).

Posteriormente, presentó: a) copia simple de constancia emitida por el Juzgado Segundo de Vigilancia Penitenciaria de Ejecución de la Pena de Santa Ana, el 13 de marzo de 2008, en la cual consta que dicha sede judicial le extinguió la responsabilidad penal por el delito de abandono de servicio; y consecuentemente le rehabilitó en sus derechos de ciudadano; y b) copia simple de certificación de antecedentes penales a su nombre, emitida por la DGCP el 23 de enero de 2017, en la cual consta que el documento fue solicitado para trámites ante el Registro de Armas.

IV. Durante la instrucción de este procedimiento, la Comisionada **Chacón de Hernández** presentó un informe en el que expresó que, luego de analizar el objeto y la causa de la apelación, se determinó que el procedimiento quedó reducido a una cuestión de derecho, en atención a líneas resolutivas emitidas por este Instituto en los procedimientos de referencia NUE 45-ADP-2017, NUE 54-ADP-2017 y NUE 90-ADP-2017, así como la aplicación de normas y principios de la LAIP, derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la Ley y el Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso, con base a los principios de economía procesal, disponibilidad, prontitud y sencillez (Art. 4 letras “b”, “c” y “f” de la LAIP).

B. Análisis del Caso.

El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Procedencia del procedimiento reducido a una cuestión de derecho; **(II)** Una breve referencia al derecho a la protección de datos personales, y en específico al derecho de cancelación y el principio de confidencialidad; **(III)** consideraciones sobre los antecedentes penales que registran las personas condenadas y rehabilitadas; **(IV)** se analizará la compatibilidad normativa del Art. 112 inc. 3 con los preceptos establecidos en la LAIP; para finalmente, **(V)** analizar la procedencia de la pretensión del apelante conforme al análisis de las normas legales pertinentes.

I. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia definitiva del proceso de legalidad, del día 28 de enero de 2019, de referencia 408-2016; señala que *"en el ámbito jurisdiccional los procesos son clasificados en procesos donde la controversia estriba en hechos alegados, y otros, en interpretación o aplicación del derecho. En el primer caso, el debate judicial gira en torno a aspectos fácticos que se alegan han acontecido y que las partes argumentan ocurrieron en forma distinta; en la segunda clasificación, no hay controversia sobre los sucesos, sino sobre la aplicación e interpretación de la norma a dichos acontecimientos, en estos casos el juzgador se limita a la interpretación y aplicación de la consecuencia jurídica, pues no hay debate respecto a la manera en que ocurrieron los hechos"*.

En ese mismo sentido, en jurisprudencia contencioso administrativa¹, se acompaña el criterio seguido por la Administración pública, puesto que, cuando no se trata de controvertir hechos, sino de la aplicación del derecho al caso en particular, resulta aplicable lo establecido en el artículo 309 del Código Procesal Civil y Mercantil, normativa supletoria aplicable de conformidad con el artículo 102 de la LAIP referido a que *"...si hubiese conformidad sobre todos los hechos y el proceso queda reducido a una cuestión de derecho, se pondrá fin a la audiencia preparatoria y se abrirá el plazo para dictar sentencia"*.

Por tanto, la Sala manifestó que la omisión de la audiencia establecida en el art. 91 de la LAIP, en asuntos de mero derecho, no produce la vulneración del debido proceso en sus manifestaciones de los derechos de audiencia, defensa, congruencia y ausencia de motivación, de dicho artículo, y el 102 de la LAIP.

En ese orden de ideas, este Instituto se ve facultado para someter el presente procedimiento de apelación, en una cuestión de mero derecho, con base a la aplicación de normas y principios de la LAIP, así como los derechos que asisten al titular de datos personales, de conformidad con el Art. 102 de la LAIP y Art. 309 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), por lo que se procedió a dar por finalizada la instrucción del procedimiento a efecto de emitir la resolución correspondiente al caso, con base a los principios de economía procesal, disponibilidad, prontitud y sencillez (Art. 4 letras "b", "c" y "f" de la LAIP).

II. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que,

¹ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 28 de enero de 2019, en el proceso de legalidad de referencia 408-2016.



entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros².

A. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Definitiva de Amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales es el medio por el cual se salvaguarda los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—; lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende de si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona; hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen; solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), la Convención

² Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.

Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de cancelación o supresión (Art. 36 letra “d” de la LAIP), que de acuerdo a la Jurisprudencia Constitucional es la facultad que se otorga a un individuo para que solicite la eliminación de sus datos de carácter personal de las bases que tenga un ente determinado, *“por la falta de relevancia y actualidad de la información para los fines que fueron recabados o, simplemente, por el propósito de permitir al titular que recupere la disponibilidad sobre cualquier faceta de su personalidad y de su datos íntimos o estrictamente privados”*³.

En ese contexto, como evolución al derecho de cancelación, se encuentra anclado el denominado “Derecho al Olvido” o “Derecho a la Caducidad del Dato Negativo Verdadero del Pasado”, el cual se define como el derecho que tiene el titular de un dato personal a **borrar, bloquear o suprimir esa información personal**, que de alguna manera afecta el **libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales**, como el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen, o que podría considerarse como **información obsoleta**, pues carece de sentido que se tenga acceso a ella **después de mucho tiempo**, y ya no sirve a los fines para los que fue recabada (principio de finalidad).

C. Ahora bien, en la sentencia definitiva de la Sala de lo Constitucional del 8 marzo de 2013, en el proceso de Inconstitucionalidad 58-2007, aclaró que el derecho a la autodeterminación informativa (o protección de datos personales), —que comporta diferentes facultades de controlar sobre el uso de la información personal que le atañe, tanto en su recolección como en su tratamiento, conservación y transmisión—, no es ilimitado. Las personas individuales o colectivas carecen de derechos fundamentales absolutos sobre sus datos. Esta es la razón por la que el individuo debe tolerar límites a ese derecho, en razón de un interés general.

Del mismo modo, se acotó que las restricciones o limitaciones pueden encontrarse justificadas en la finalidad que persigue la recolección y administración de los datos personales, la

³ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.



cual debe ser legítima (constitucional o legal), explícita y determinada. Para ello el legislador debe tener en cuenta no solo el principio de proporcionalidad, sino también el derecho general del ciudadano a la libertad frente al Estado, que solo puede ser restringido por el poder público cuando sea indispensable para la protección del interés general. Y es que la fuerza obligatoria del derecho constitucional se manifiesta, en primer lugar, en la prohibición de emanar normas contrarias a la Constitución.

Por lo que, en cada caso en concreto, se debe dejar claro el alcance del límite a derechos, y no quedando sujetos a fórmulas interpretativas que restrinjan un derecho más allá del alcance planteado por el legislador.

D. Es importante señalar que el derecho a la protección de los datos personales se encuentra informado por una serie de principios, en el que resalta para el caso en concreto: el principio de confidencialidad (Art. 36 letra “d” de la LAIP).

Este se define como la obligación del responsable del registro de las bases de datos, de establecer controles o mecanismos para quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos personales a fin de que mantengan y respeten el secreto de los mismos, obligación que subsistirá aun después de finalizar sus relaciones con el titular de los datos personales⁴.

En adición a este principio, se encuentran algunos métodos preventivos para salvaguardar la identidad, circunstancias o situaciones en las que una persona individual o jurídica se encuentra inmersa, por ejemplo, las reglas de anonimización, las cuales funcionan para facilitar el procesamiento de datos personales, pero a la vez para proteger al individuo de un seguimiento de sus datos mediante la asignación automática de características que lo permitan individualizar.

También, se encuentra el bloqueo de los datos personales, que es el método que tiene como fin impedir su ulterior tratamiento o disposición, produciendo efectos similares al borrado físico de los mismos; esto procede cuando existe una imposibilidad técnica como por causa del procedimiento o soporte utilizado, también cuando una norma legal ordena la conservación de los datos personales y otorga únicamente su disposición a las autoridades públicas conforme a sus atribuciones y competencias, impidiendo que terceros tengan acceso a esos datos, garantizando la confidencialidad de los mismos, salvo que sean necesarios para garantizar razones de seguridad nacional, seguridad pública, orden público, salud pública o salvaguarda de derechos y libertades de terceros.

⁴ Disposición 23, de los “Estándares de Protección de Datos Personales” emitidos por la Red Iberoamérica de Protección de Datos, en Santiago de Chile, Junio 2017.

III. Establecido lo anterior, es pertinente mencionar que los antecedentes penales son **datos que indican que una persona tiene registrada una condena sobre el cometimiento de conductas tipificadas en el vigente Código Penal y en otras normas de igual naturaleza.**

A. En el caso de nuestro país, dichos antecedentes son registrados en el Sistema de Registro de Antecedentes Penales (SIRAP), a cargo de la **DGCP**, la cancelación de éstos, de acuerdo al Art. 110 numeral 2° del CP, se da por efecto de la rehabilitación⁵; y caducan al año de extinguida la pena, cuando los antecedentes tienen dicha calidad, y se soliciten certificaciones, se hará constar dichas circunstancias en ambos casos (Art. 112 inc. 3° del CP).

De lo anterior se colige que al interpretar dicha norma⁶, el legislador creó dos tipos de antecedentes penales, unos **activos** y otros **pasivos**; estos últimos los componen aquellos que fueron cancelados por la rehabilitación o por la caducidad por efecto del mero transcurso del tiempo una vez extinguida la pena.

B. De conformidad con el Art. 36 letra "d" de la LAIP, los titulares de los datos podrán solicitar la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información que le concierna, según sea el caso, y **toda vez que el procedimiento para tales modificaciones no esté regulado por una ley especial**. En ese sentido, dicho procedimiento, no le es aplicable para cancelar los antecedentes penales **activos**, ya que el CP ha establecido un procedimiento especial para dicho efecto, que es por medio de la rehabilitación (Art. 110 numeral 2°).

Ahora bien, respecto a los antecedentes penales **pasivos** (caducados o cancelados), el CP no establece ningún tipo de procedimiento para la rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de la información, tampoco el Código Procesal Penal y la Ley Penitenciaria señalan nada al respecto, por lo que le es aplicable lo establecido en los Arts. 36 letra "d" en relación al 7 de la LAIP. Asimismo, sobre la confidencialidad de la información conforme al Art. 24 letra "b" de la Ley, aplicando la heterointegración normativa.

⁵ Luego de la aplicación al condenado del régimen jurídico personal fijado en la sentencia, por tanto tiempo como se defina en cada caso, pero sin sobrepasar los máximos señalados en la Constitución y la ley, se supone que la persona ha sido reeducada para la vida en comunidad o, al menos, se puede afirmar que cumplió con las cargas que legítimamente tasó y le impuso el juez competente y, sea que su resocialización se haya logrado o no, el poder punitivo del Estado se agotó para con esa persona y por los hechos que sirvieron de sustento a la condena. Así, la persona tiene, entonces, derecho a reincorporarse a la vida comunitaria en igualdad de derechos con los demás (Sentencia de la Corte Constitucional de la República de Colombia de referencia No. T-218/94).

⁶ Interpretar una norma es una operación cognoscitiva a través de la cual se busca desentrañar su espíritu y significado; esto no puede realizarse de forma abstracta o aislada, sino integrada en el contexto del cuerpo normativo a que pertenece, de manera sistemática. Sentencia Definitiva de la Sala de lo Contencioso Administrativo del día 11 de julio de 2003, en el proceso de legalidad de referencia 181-A-2001.



En ese sentido, este Instituto tiene la competencia legal para conocer y determinar conforme al Art. 29, 83 letra “a” y 96 letra “d” de la LAIP, sobre lo peticionado por el apelante. Asimismo, posee la competencia de velar por la correcta interpretación y aplicación de la LAIP conforme a su Art. 58 letra “a”; además, interpretar las normas a la luz de la Constitución, actitud que se exige no sólo para entes jurisdiccionales, sino de manera general para todo funcionario de acuerdo a la jurisprudencia contenciosa administrativa⁷ y en aplicación al Art. 235 de la Cn.

IV. Es preciso analizar la normativa por la que la DGCP, fundamenta sus argumentaciones y determinar si es compatible con los derechos y principios establecidos en la LAIP.

A. El Art. 112 inc. 3º del CP, indica que: “En los casos de cancelación o caducidad de los registros, el antecedente penal que consta no se tendrá en cuenta para ningún efecto; **si se solicitan certificaciones de éstos, se deben hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias**”.

Lo dispuesto en dicha disposición, al señalar que no se tendrán en cuenta para ningún efecto, se encuentra en consonancia con lo establecido en el Art. 75 inciso final de la Cn. Asimismo, la jurisprudencia en materia penal⁸ ha sostenido que tales antecedentes para efectos de establecer conductas anteriores resultan ilegítimos y con su valoración se conculca el principio de culpabilidad y se es proclive a realizar un doble juzgamiento.

Ahora bien, es pertinente señalar que dicho registro, no puede ser una fuente de información indiscriminada, pues ello afectaría el derecho constitucional a la protección de datos personales, enmarcado en el Art. 2 de la Cn, cuyo objetivo es proteger los datos e información de sus respectivos titulares, el cual como se ha mencionado, se sustenta en la seguridad jurídica y se relaciona en la protección de los derechos a la intimidad y a la privacidad.

B. Es por ello, que el legislador estableció en el Art. 112 del CP, que los jueces y magistrados en materia penal, el propio interesado, y el juez de vigilancia penitenciaria, tienen acceso a través de la DGCP, al registro de antecedentes penales donde se anotan las sentencias condenatorias en las que se haya declarado la culpabilidad de una persona imponiéndole una pena, denotando que la norma restringe el acceso de la información obrante a otros sujetos que no tienen competencia en materia penal.

⁷ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo el 27 de junio de 2000, en el proceso de legalidad de referencia 157-M-99.

⁸ Sentencia Definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia de Santa Ana, el día 6 de mayo de 2008, en el caso de referencia P0201-68-2008.

Sin embargo, es importante señalar que existen otros cuerpos legales y facultades constitucionales que habilitan a otras autoridades públicas que no se señalan en la disposición antes mencionada, al acceso a la información que registra esa base de datos, con el objetivo de satisfacer requisitos legales para trámites determinados o funciones de índole investigativa, que redundan en la búsqueda de un interés general de la seguridad pública.

C. En el presente caso, el apelante señala que su petición se encuentra orientada a obtener una certificación donde se omita cualquier fórmula en la leyenda de los antecedentes, de la cual pueda inferirse la existencia de los mismos, aduciendo que se encuentra rehabilitado, y por tanto no tiene cuentas pendientes con las autoridades judiciales.

Desde esa óptica, para facilitar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales mediante los trámites establecidos en dicha ley, el Art. 110 de la LAIP derogó tácitamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales y especiales que contraríen las reglas o principios creados por dicha normativa, dejando expresamente vigente las disposiciones jurídicas ahí enunciadas⁹, entre las que no se encuentra el Art. 112 inciso 3°, lo que evidencia una derogación por incompatibilidad ya que **hacer constar expresamente en su caso ambas circunstancias en una certificación**, la palabra cancelado o caducado sin un límite temporal y con una finalidad alejada a la materia penal y basados en un interés general de seguridad pública, es contrario a los principios constitucionales de la protección de datos personales, en especial al derecho al olvido, pues sostener ese argumento conllevaría a considerar que en El Salvador existen penas perpetuas, opuesto a lo establecido en el Art. 27 Inc. 3° de la Constitución.

Asimismo, a lo establecido en su Art. 75 parte final, en lo relativo a uno de los efectos de la rehabilitación dictada por la autoridad competente, que es la resocialización plena del individuo a la sociedad¹⁰, ya que medidas como la antes señalada, se terminan convirtiendo en *“peores que las marcas de fuego que se utilizaban en la Edad Media, ya que le da un carácter indeleble al condenado prácticamente de por vida y no solo frente a las autoridades, incluso frente a otros particulares”*¹¹, como es el caso cuando son utilizados en materia laboral.

⁹ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 10 de octubre de 2014, en el proceso de amparo de referencia 106-2014.

¹⁰ Sentencia Definitiva de la Sala de lo Constitucional emitida el 14 de febrero de 1997 en el proceso de inconstitucionalidad de referencia 15-96 y Ac.

¹¹ Grosso Galván, Manuel. Los antecedentes penales, rehabilitación y control social. España. Casa editorial Bosch. S.A. 1983. Págs. 8-9.



En ese sentido, establecer la palabra cancelado o caducado, es contraria a las nuevas tendencias penológicas, las cuales consideran que la finalidad del tratamiento penitenciario es la reeducación y la reinserción social del condenado, tal como lo ha sostenido la Sala de lo Constitucional¹², pues aquel que ha cumplido su pena y le fueron rehabilitados sus derechos o han sido caducados sus antecedentes, debe soportar las consecuencias que conlleva hacer pública y mantener indefinidamente una anotación de tales características, frente a su vida cotidiana y en especial cuando deba presentar dicho documento para acceder a un trabajo, pues surge evidencia que tal certificación con dichas características, merma ostensiblemente las posibilidades de ser escogido para el mismo, lo que conlleva la vulneración de derechos fundamentales como el de igualdad en el acceso a las oportunidades de empleo y a la vida en condiciones dignas, situación que a la larga termina convirtiéndose en un castigo adicional y permanente.

Sin embargo, es conveniente realizar una interpretación conforme a la constitución y a la finalidad expresada en el Art. 112 del CP, que permita la compatibilidad con los preceptos establecidos en la LAIP.

V. Una vez determinado lo anterior, corresponde analizar la pertinencia de la supresión de los antecedentes penales pasivos del SIRAP a cargo de la DGCP.

A. La LAIP en su Art. 32, establece deberes y reglas a los entes obligados, sobre el tratamiento de los datos personales en su poder, enmarcados en los principios que orientan el derecho a la protección de datos personales.

En ese sentido, dicha normativa establece como obligación en la letra b, el *“usar los datos exclusivamente en el cumplimiento de los fines institucionales para los que fueron solicitados u obtenidos”*, esta regla en consonancia con el principio de finalidad, que según jurisprudencia constitucional, *“los datos de carácter personal deben ser recogidos para alcanzar un objetivo lícito, es decir, deben ser utilizados para un fin específico y legítimo; por lo que una vez que este ha sido alcanzado la información debe cancelarse para impedir que sea utilizada en una finalidad distinta para la que se ha obtenido”*¹³.

¹² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 9 de abril de 2008, en el proceso de Inconstitucionalidad de referencia 25-2006 AC.

¹³ Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 20 de octubre de 2014, en el proceso de amparo de referencia 142-2012.

B. En esa lógica, es pertinente señalar que la **DGCP** al momento de emitir la certificación del registro de antecedentes penales “pasivos”, de acuerdo al Art. 112 inc. 3° del CP, cuando sea dirigida a jueces en materia penal y de vigilancia penitenciaria o cuya finalidad sea relacionada a un proceso penal, independientemente de si la jurisdicción penal la solicite o sea el propio interesado, se colocará las palabras que dice dicha norma; aunado a ese criterio, es pertinente indicar que llevarán también esas palabras cuando sea con fines de investigación sobre un ilícito penal o reincidencia delictiva, y cuando una ley en sentido formal, lo requiera como requisito para un trámite, sobre todo cuando esté relacionado en materia de seguridad pública y porque prevalece el derecho de la población a la seguridad ciudadana frente a un derecho individual.

En relación con ello, en el presente expediente, consta la solicitud del apelante, en donde manifestó que su petición estaba encaminada a legalizar un arma de fuego.

En atención a lo anterior, es pertinente indicar que, en nuestro país poseer y usar armas de fuego, **no es un derecho constitucional reconocido**, sino una prerrogativa sujeta a regulaciones de conformidad con el Art. 217 de la Constitución de la República, pues las armas son consideradas objetos de riesgo que amenazan la seguridad ciudadana, por lo que es admisible y deseable políticamente la existencia de limitaciones intensas o restricciones para la obtención de las mismas.

En virtud de lo antes dispuesto, la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares, establece en sus Arts. 23 literal b), 24 literal f) y 63 literal “c”, como requisito la carencia de antecedentes penales y policiales, para obtener la licencia para uso de arma de fuego y la matrícula para la tenencia y portación de las mismas, por lo que la supresión de dichos antecedentes no es viable.

Por ende, este Instituto considera que el derecho a la supresión en este caso, no aplica; tampoco la confidencialidad del dato, cuando la certificación está orientada al cumplimiento de un requisito legal, ligado a la seguridad pública de la población, tal como se estableció en las resoluciones de revocatoria de los procedimientos de referencia NUE 45-ADP-2017 y NUE 54-ADP-2017.

Por lo anterior, es pertinente modificar la resolución de la oficial de información de la **DGCP**, en el sentido que no procede la supresión, tampoco su bloqueo o confidencialidad, debido a que la petición del apelante sobre la certificación es para obtener licencia para uso de arma, cuyo requisito legal es la carencia del antecedente penal de acuerdo a la Ley antes mencionada, y enfocada a razones de seguridad pública y de la colectividad ciudadana.

C. Decisión del Caso.

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con los Arts. 6 y 18 de la Cn., 94, 96 letra "b" y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

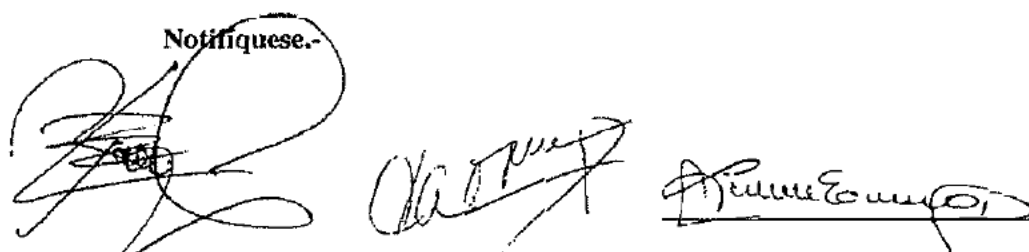
a) **Modificar** la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección General de Centros Penales (DGCP)** el 19 de enero de 2018.

b) **Ordenar** a la DGCP que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de la presente resolución, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, de lo dispuesto en el literal a) de la parte resolutive de este auto. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv.

c) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique el cumplimiento de esta resolución.

d) **Publíquese** esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

DR/IC
...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cinco días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.


NOTIFICADOR INTERINO
IAIP

